

de esta Capital, que desconoció la personalidad de su apoderado Buénaventura García. Segundo: sáquense las copias de estilo, y cúmplase al final del artículo 13 de la ley citada.

Lo proveyó el C. Licenciado Limbano Correa, Juez de Distrito del Estado, y firma conmigo su escribano que doy fé.—*Lic. Limbano Correa.*—Ante mí.—*Gabriel Sosa.*

Es copia que certifico. San Juan Bautista, Setiembre 26 de 1873.—*Gabriel Sosa,* secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, 28 de Noviembre de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Tabasco, por Doña Estéfana Sanchez, contra la providencia dictada por el Juez segundo de Paz de San Juan Bautista, negándose á admitir como su apoderado en juicio al C. Buenaventura García, en cumplimiento de lo dispuesto por la circular del Tribunal pleno de Justicia del Estado, que prohíbe admitir como apoderados judiciales á otros que no sean abogados titulados, ó parientes inmediatos de las partes, con cuya resolución se violan en concepto de la quejosa, las garantías que otorgan los artículos 4, y 20 fracción 5ª, 28 y 35, fracción 5ª de la Constitución federal, y considerando: que con la providencia que ha motivado el presente recurso, se vulnera el derecho de petición que declara inviolable el artículo octavo de la Constitución federal.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la misma, se decreta; Primero: que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en 25 de Setiembre del presente año, que declaró no haber lugar al amparo federal: Segundo: la Justicia de la Union ampara y protege á Doña Estéfana Sanchez, contra la providencia del Juez segundo de Paz de San

Juan Bautista que desconoció la personalidad de su apoderado Buenaventura García, por no ser abogado titulado ni pariente inmediato de la quejosa.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*José M. Lozano.*—*José Arceaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José Garcia Ramirez.*—*Lic. Enrique Landa,* secretario.

Es copia. México, Diciembre 4 de 1873.—*Emilio Ordaz,* oficial mayor interino.

COMPETENCIA.

Promovida por el Juez de Distrito de Matamoros contra el de 1ª instancia del mismo puerto, para conocer de la Causa iniciada contra los celadores de la 1ª seccion del contraresguardo de la frontera del Norte de Tamaulipas, por el homicidio y heridas que se ocasionaron al verificarse la aprehension de un contrabando.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

El fiscal dice: que el 11 de Abril próximo pasado, la seccion primera del contraresguardo de la frontera del Norte, Estado de Tamaulipas, aprehendió 17 bultos de mercancías; pero como quiera que los contrabandistas se resistieron, haciendo uso de sus armas, á que les aprehendiesen dichos efectos, se trabó un combate, resultando herido Ruperto Rueda que venia entre los cantrabandistas, y muerto Enrique Porras.

De dicho acontecimiento comenzó á juzgar el Juez de Distrito del Estado de Tamaulipas, residente en Matamoros, encaminando sus primeras diligencias á la averiguacion del contrabando, y como en el curso de ellas descubriera el incidente de muerte y heridas, se ha creído competente tambien para conocer de él. A este fin dirigió exhorto al alcalde primero de la Villa de S. Fernando de Presas, entablándole competencia para conocer del aquel incidente, respecto del que dicho alcalde ya habia empezado á practicar la correspondiente averiguacion. Recibido el exhorto por el Juez de S. Fernando, dispuso se pasara en consulta al Juez de primera instancia de Matamoros para que le indicase lo que debia hacer. El juez consultado aconsejó al de S. Fernando que se sostuviera la competencia, y esto ya á nombre del mismo Juez de primera instancia. En vista de esta manifestacion, el Juez de Distrito de Matamoros entabló ya directamente la competencia con el Juez de primera instancia de esa ciudad, dirigiéndole el oficio correspondiente.

A pesar de la razones que mutuamente se dieron ambas autoridades en apoyo de su respectiva jurisdiccion, no conformándose entre sí, han remitido sus actuaciones á esa primera Sala á fin de obtener una resolucion definitiva.

El Juez de Distrito de Matamoros hace derivar su autoridad, para conocer del incidente criminal de muerte y heridas, en que tratándose de un incidente en que el negocio principal es del esclusivo resorte de los Tribunales de la Federacion, parece legal que conozca tambien de dicho incidente. Dice mas, que el caso que ahora se ventila está comprendido en el artículo primero del decreto de 3 de Octubre de 1872, que al restablecer ese Juzgado de Distrito del puerto de Matamoros, termina con estas, en concepto decisivas palabras: "Siendo ademas dicho juzgado el único competente para conocer de los asuntos del contrarresguardo de Tamaulipas." Y á mayor

abundamiento invoca tambien el artículo 54 de la pauta de comisos que previene, que cuando los procedimientos de los juicios de comiso resultase algun incidente criminal, por lo que pueda haber lugar á otra pena, el juez seguirá este juicio por cuerda separada.

A su vez el Juez de primera instancia hace consistir su jurisdiccion en la naturaleza misma del hecho, á saber: que es un hecho criminal correspondiente al fuero comun; y en la restriccion que por nuestras actuales instituciones tienen los fueros privilegiados.

El suscrito al examinar estas razones, las encuentra tan conformes á derecho, y sobre todo á nuestra Constitucion política, que no ha vacilado en adoptarlas; tanto mas, cuanto que las espuestas por el Juez de Distrito en apoyo de su jurisdiccion, envuelven una especie de sofisma, que si á primera vista las hace atendibles, sugestionándose á un exámen, quedan destituidas de todo fundamento.

En efecto, si bien es cierto que el artículo primero del decreto de 3 de Octubre citado, previene que el Juzgado de Distrito de Matamoros sea el único competente para conocer de los asuntos del contrarresguardo de Tamaulipas, esas palabras deben entenderse en términos hábiles, es decir, en un sentido conforme á su propia institucion, y sobre todo á los principios constitucionales que nos rigen.

La prevencion del decreto citado equivale á tanto como á disponer que el Juzgado de Distrito de Matamoros, obrando dentro de la órbita de sus facultades y en los negocios del órden puramente federal, estiende su jurisdiccion á todo el contrarresguardo del Estado de Tamaulipas, pero no á que estiende su autoridad aún á asuntos en que la federacion no tiene interés alguno. Es cierto que en un negocio de estricto órden federal puedan resultar incidentes de los que tambien deba conocer el Juez de Distrito; pero esto será en aquellos casos muy raros, en los que por no dividirse la

continencia de la causa, la justicia federal los atraiga á su conocimiento; pero en aquellos que sin ese temor puedan correr muy bien por cuerda separada, no hay motivo para que se sugeten al conocimiento del Juez de Distrito.

Respecto de la cita que se hace del artículo 54 de la pauta de comisos, el fiscal entiende que debe interpretarse con la misma reserva para dejar incólumes los artículos 13, 96 y 97 de la Constitucion general de la República. Pero aun cuando así no fuese; aun suponiendo que el espresado artículo de la pauta de comisos se lo diera tal extension que se incluyera en ellos los incidentes criminales como el de que ahora se viene tratando, debería entónces considerarse derogado, no solamente por el espíritu bien marcado de nuestro código fundamental que constituido bajo las mas amplias bases, de una perfecta igualdad ante la ley, ha suprimido toda clase de fueros, sino en el tenor literal de varios de sus artículos. Ciertamente el artículo 13 de que se ha hecho mencion, no puede ser mas espreso y terminante. Y si con arreglo á esa misma Constitucion han quedado subsistentes el fuero de guerra y el fuero del fisco, por lo mismo que una necesidad imperiosa é inevitable exige su conservacion, sus atribuciones deben restringirse á lo estrictamente anexo á ser institucion; ensanchar sus límites en cualquiera sentido, sería violentar la mente de nuestros legisladores de 1857.

Por lo espuesto, el suerito entiende que el incidente á que se contrae esta competencia, es del esclusivo conocimiento del Juez de primera instancia de Matamoras. Su jurisdiccion está fundada en la ley 15 tit. 1º Prt. 7º, y 3º tit. 35 con la 1ª tit. 36 de la N. R. que determina: que en los asuntos criminales, es juez competente, en primer lugar, el de aquel en que se cometió el delito; y puesto que los de homicidio y heridas que se están persiguiendo, fué cometido en el territorio del juez local de Matamoras, es una consecuencia lógica y legal de

declararlo expedita su jurisdiccion para seguir conociendo de los espresados delitos.

Por tanto, el fiscal concluye con la siguiente proposicion.—Unica.—Se declara que el Juez de primera instancia de Matamoras, es competente para seguir conociendo del incidente criminal, que sobre homicidio y heridas ha ocurrido en el juicio sobre comiso de 17 bultos de efectos aprehendidos por la Seccion primera del contrasguardo de la frontera del Norte, en el punto llamado "Loma Prieta," jurisdiccion de San Fernando de Presas, en Matamoras Estado de Tamaulipas. México, Octubre 22 de 1873.—*Altamirano.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 28 de 1873.—Vista la competencia promovida por el Juez de Distrito de Matamoras, contra el de primera instancia del mismo puerto, para conocer de la causa iniciada contra los celadores de la primera seccion del contrasguardo de la frontera del Norte de Tamaulipas, por el homicidio y heridas que se ocasionaron al verificarse la aprehension de un contrabando. Vistos los informes de los jueces competidores: lo pedido ante esta primera Sala por el Sr. Fiscal, con todo lo demás que de autos consta, se puvo presente y ver convino. Considerando: que el incidente criminal á que se contrae la presente competencia, importa unos delitos que son esclusivamente del orden comun, y por lo mismo ajenos del conocimiento de la justicia federal. Que los tribunales de la federacion solo son competentes, conforme á su institucion, para conocer de los negocios civiles ó criminales en que tenga interes la Hacienda pública. De conformidad con lo pedido por el Sr. Fiscal, y por los propios legales fundamentos en que se apoya su respectivo pedimento, se decreta: que el Juez de primera instancia del puerto de Matamoras, es competente para conocer la causa

que se ha iniciado contra los celadores de la sección primera del contraresguardo de la frontera del Norte de Tamaulipas.

Remítanse las actuaciones con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; remítase copia igual al de Distrito de dicho puerto para su conocimiento; hágase saber, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron la primera Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Enrique Landa*, secretario.

En copia. México, Enero 9 de 1874.
—*Alejo Gomez Eguiarte.*

AMPARO

Promovido ante el juzgado de Distrito de Jalisco por el Lic. Emeterio Robles Gil, contra la providencia dictada por el Magistrado de la 4ª Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mandando que se suspendiera la secuela de un juicio que patrocina el quejoso, mientras no justificara haber satisfecho el derecho de patente de su profesion.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El Promotor fiscal dice: Por haber dispuesto la 4ª Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en auto de 23 de Junio último, dictado sobre el negocio civil que siguen D. Mariano Jimenez y hermanos contra D. Jesus Garcia, que el Señor Robles debia acreditar tener pagado el derecho de patente, segun lo dispone el artículo 6º de la ley del Estado de 20 de Junio del año próximo pasado, el expresado Robles Gil

ha pedido amparo contra esa providencia, fundado en la fraccion 1ª artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869. Alega que por el auto de la sala se atacan en su persona las garantías otorgadas por el artículo 4º de la Constitucion federal, puesto que se le suspende en el ejercicio de su profesion de abogado, mientras no presente la constancia de haber pagado el derecho de patente, segun lo previene un decreto del Estado de 20 de Junio de 1872, en su artículo 6º, y se le obliga así al pago de esa contribucion sobre profesiones, con infraccion del artículo 4º constitucional citado.

Alega además, que el derecho de patente restablecido en el Estado por el decreto número 297, no es en realidad una contribucion de las que habla la fraccion 2ª del artículo 31 de la Constitucion, puesto que no es ni proporcional ni equitativa. El Magistrado de la 4ª Sala dice en su informe, que solo ha exigido al Señor Robles Gil, acredite tener pagado el derecho de patente, sin conminarlo con la pena de suspension establecida por el artículo 6º del decreto de 20 de Junio de 1872, porque siempre ha tenido la opinion de que dicha pena es atentatoria y restrictiva de la garantía otorgada por el artículo 4º de la Constitucion general.—Considerando el Promotor, que el derecho de patente que por decreto del Estado se cobra á los que ejercen la profesion de abogado, se basa en los productos anuales desde \$ 500 hasta \$ 3,000 para arriba, gravándolos desde \$ 6 hasta \$36 al año, y que por lo mismo no es ni falta de equidad ni de proporcion, y va enteramente de acuerdo con lo prevenido en la fraccion 2ª del artículo 31 de la Constitucion; que no se cobra al Señor Robles Gil dicho derecho de patente por el auto de la 4ª Sala, y solo se exige presente la constancia de tenerlo pagado; y que aun suponiendo que la pena de suspension en el ejercicio profesional decretada por el artículo 6º de la ley de 20 de Junio de 1872 fuera contraria al artículo 4º de la Constitucion,